

La Operación Colombo o la extrema crueldad de Pinochet

Mario Amorós. Diario 16. 4 de septiembre de 2000

Hace 25 años, a mediados de 1975, la dictadura chilena orquestó una perversa campaña de desinformación para convencer a la opinión pública nacional e internacional de la inexistencia de detenidos desaparecidos. Su eje fue la publicación de dos listas de 119 detenidos desaparecidos en Argentina y Brasil, hecho que demostró por primera vez a sus familiares que habían sido asesinados.

Entre abril y julio de 1975 la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía política) planificó y ejecutó una siniestra campaña de desinformación cuyo objetivo era convencer a la opinión pública nacional e internacional y a los organismos de defensa de los derechos humanos de la inexistencia de personas desaparecidas en Chile. Para intentar ocultar sus crímenes y perpetuar la impunidad, la junta militar contó con la colaboración de los medios de comunicación y de la agencia de noticias norteamericana UPI, así como de los servicios de inteligencia y de la extrema derecha de Argentina. En los primeros días de julio de 1975, cuando arreciaban las críticas internacionales contra la actuación represiva del régimen y los familiares de las víctimas ya habían presentado recursos de amparo sin resultado alguno, Pinochet impidió que una Comisión Especial de Naciones Unidas investigara las violaciones de los derechos humanos y el paradero de los detenidos desaparecidos.

En este contexto, el 15 de julio de 1975 se publicó en Buenos Aires el único número del semanario *Lea*, que en un amplio reportaje titulado "La Vendetta Chilena" citaba los nombres de sesenta militantes del guevarista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile que habrían sido asesinados por sus propios compañeros en distintos países de América Latina y Europa. "Alrededor de sesenta extremistas chilenos han sido eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha en un vasto e implacable programa de venganza y depuración política...", aseguró *Lea*.

La distribución de su único número estuvo a cargo de la editorial Codex, que dependía entonces del Ministerio de Bienestar Social, cuyo titular era José López Rega, *El Brujo*, uno de los fundadores de la ultraderechista Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), imputada en más de mil asesinatos y desapariciones entre 1974 y 1977.

A partir del 19 de julio la prensa chilena se hizo eco de esta falsedad a través de un teletipo de UPI cuyo encabezamiento rezaba: "Extremistas chilenos se matan entre ellos". El diario La Tercera, por ejemplo, empleó titulares como "El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres".

Además, el 24 de julio el vespertino La Segunda reprodujo, bajo el indecente título "Exterminan como ratas a miristas", una información falsa ofrecida el 17 de julio por el periódico O'Día de Curitiba (Brasil), que renació sólo aquel día tras muchos años sin publicarse. O'Día nombraba a los 59 militantes del MIR que habrían "muerto", habrían sido "heridos" o se habrían "evadido" tras los supuestos dos últimos enfrentamientos entre la policía de Salta (Argentina) y grupos guerrilleros.

Desde abril la DINA había preparado a la opinión pública para que la aparición de ambas listas lograra la mayor credibilidad a fin de imputar sus crímenes a las propias víctimas. Así, habían hecho aparecer en Argentina cuatro cadáveres mutilados que corresponderían a los ciudadanos chilenos David Silberman, Jaime Robotham, Luis A. Guendelman y Juan Carlos Perelman, quienes habrían sido asesinados por el MIR.

Otra mentira. Además, los cuerpos no pertenecían a estos detenidos desaparecidos. De los cuatro, sólo Robotham y Perelman aparecen entre los 119.

También en estas acciones participó la Triple A argentina ya que en el trapo donde supuestamente el MIR se atribuía el asesinato de Silberman aparecía la firma "MMM", siglas que, según señala Stella Calloni en su libro Los años del lobo, correspondían a la Milicia Nacional Justicialista, grupo integrado en la Triple A.

Asimismo, desde el 6 de junio la prensa chilena estaba publicando con gran estruendo una serie de noticias destinadas a convencer a la opinión pública de la existencia de guerrilleros chilenos al otro lado de los Andes que preparaban incursiones en su propio país. Titulares como "Ejército guerrillero forman contra Chile" o "Extremistas chilenos se adiestran en Tucumán", ambos de La Tercera, intentaron convencer a la población del supuesto "peligro" que amenazaba al país y por tanto obtener su comprensión hacia la implacable represión desatada por el régimen.

A partir de todas estas falsedades y utilizando a unos medios de comunicación que cayeron en las prácticas más abyectas, el régimen emprendió una despiadada campaña para humillar a los familiares de los detenidos desaparecidos y a los organismos que les prestaban apoyo, como el intereclesial Comité de Cooperación para la Paz. Valga como ejemplo que La Tercera llegó a afirmar que "las pseudo organizaciones humanitarias comenzaron a desprestigiar al Gobierno, acusándolo en los recursos de amparo de que la Policía y los servicios de inteligencia detenían a 'inocentes' (...) Ahora se confirma que esos extremistas jamás fueron detenidos y que en cambio lograron salir del país..."

No era ésta la primera campaña de desinformación auspiciada por Pinochet. Poco después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, la junta militar, con la ayuda de expertos de la CIA, inventó el Plan Z y publicó el Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile para justificar la asonada golpista con el argumento delirante de que el presidente Salvador Allende pretendía instaurar una dictadura marxista. Durante años Pinochet y sus partidarios han recurrido tanto al Plan Z como a la Operación Colombo para explicar el quiebre democrático y negar sus terribles crímenes.

Sin embargo, en 1991 el Informe Rettig, que recogió los crímenes del pinochetismo, confirmó que esas 119 personas (cien hombres y diecinueve mujeres, menores de treinta años y militantes del MIR en su gran mayoría) fueron detenidas, torturadas, encarceladas, asesinadas y hechas desaparecer por agentes de la DINA. Fueron secuestradas entre el 23 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975. De 94 de ellas había antecedentes concretos sobre la forma en que habían sido detenidas y 106 de ellas habían sido vistas en distintas centros de tortura clandestinos, como Londres 38, José Domingo Cañas, Cuatro Alamos o Villa Grimaldi. Aún hoy se desconoce por qué la DINA escogió los nombres de estos desaparecidos para elaborar las listas. En 1978, un agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, confirmó la existencia de la Operación Colombo durante un interrogatorio al que fue sometido por oficiales del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) argentino, en un momento en que las dictaduras de ambos países se disputaban la soberanía del austral canal del Beagle. Además, los agentes del SIDE le incautaron, entre otros documentos, células de identidad de cinco personas que aparecieron en las listas de los 119.

"En 1975 con motivo de la llegada a Buenos Aires de otro agente de la DINA llamado Iturriaga [Raúl Iturriaga Neumann, jefe del departamento exterior de la DINA], en esa época mayor del ejército, vuelvo a contactar a Ciga Correa [miembro de la Milicia Nacional Justicialista], ya que transcurridos algunos días de la llegada de Iturriaga, éste me refiere que volvía a Chile en razón de haber fracasado en su objetivo. Inquiriéndole sobre los motivos de su fracaso y sugiriéndole la posibilidad de ayudarlo, Iturriaga me informa que su misión es hacer aparecer en Argentina a un subversivo chileno cuyo nombre es Simelman [David Silberman], o algo parecido, muerto en Chile, habiendo bautizado este operativo como Operación Colombo", confesó Arancibia. La Operación Colombo fue el precedente más inmediato del Plan Cóndor, que se creó de manera oficial a finales de noviembre de 1975 en Santiago de Chile a iniciativa del coronel Manuel Contreras (jefe de la DINA), según explicó, a partir de documentos desclasificados por Estados Unidos, el prestigioso investigador norteamericano Peter Kornbluh en la revista mexicana Milenio hace un mes. A partir de entonces, y con el apoyo de Washington, las dictaduras militares de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia estrecharon su colaboración en su sangrienta cruzada antimarxista.

El dolor de los familiares

En 1994 el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) publicó La gran mentira. El caso de las "Listas de los 119", un exhaustivo estudio sobre la Operación Colombo. Este informe denuncia que la dictadura recurrió

a "la violencia dirigida a producir una ruptura a nivel del psiquismo, actuando directamente sobre las emociones, sobre los sentimientos más simples y más primarios. Es la violencia que se utiliza para conseguir el objetivo fundamental del 'Nuevo Poder': el control social y el control individual que paulatinamente se obtiene a través del control de las conciencias".

El impacto psicológico de aquel siniestro ejercicio de manipulación informativa sobre los familiares de los 119 detenidos desaparecidos fue "agudo y brutal", según CODEPU, ya que por primera vez tuvieron la certeza de que sus seres queridos habían sido asesinados. La madre de una víctima recordó así los primeros momentos: "Me encerré en el baño, ahí en el Comité, lloraba y lloraba. Luego me levanté y, sin poder contenerme, gritaba mientras me golpeaba la cabeza contra las paredes de un lado a otro. No podía ser..." Otra madre aseguró que aquellos días "se consumó la burla de la dictadura, su terrible crueldad".

Cada año, en julio, los familiares de Gabriela Uribe, de Martín Elgueta, de María Cristina López, de Mario Fernando y Patricia Peña..., de los 119, se reúnen con sus fotografías y sus nombres para volver a preguntar, una vez más, "¿Dónde están?" y para exigir de nuevo verdad y justicia. En 1975 estas personas acudían a diario a la sede del Comité de Cooperación para la Paz para realizar todos los trámites posibles a fin de hallar a sus familiares detenidos desaparecidos. Sin embargo, aquel golpe terrible de la dictadura les planteó la necesidad de intensificar su unidad y su lucha y así nació la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. "Nos dimos cuenta que estábamos ante una maquinaria de exterminio tan poderosa que atravesaba nuestras fronteras y por ello decidimos organizarnos", me explicó hace tres años Sola Sierra, su primera presidenta.



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios "Miguel Enríquez", CEME: <http://www.archivo-chile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores.

© CEME web productions 2005

